

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diez.-

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el abogado de la Procuraduría Pública Ad Hoc de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -Parte Civil- contra la resolución de fecha seis de abril de dos mil nueve, obrante a fojas mil novecientos sesenta y tres; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO:** **Primero:** Que, el Procurador Público impugnante, con su recurso de nulidad fundamentado a fojas mil novecientos sesenta y ocho, cuestiona la decisión del Colegiado Superior de declarar fundada la excepción de cosa juzgada deducida por el procesado Christian Francisco Guzmán Miranda, extensiva a Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez, Julio Rodríguez Albarracín, Danilo Roberto Cuadros Palacios, Jhonny Charly Díaz Farfán, Pedro Celestino Reynaldo Córdova y Dionisio Napuri Lavado, en el proceso que se les sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la Fe Pública, en agravio del Estado, alegando que respecto a los procesados Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez y Pedro Celestino Reynaldo Córdova existen pronunciamientos previos en calidad de cosa juzgada que resuelven el mismo medio técnico de defensa basado en el mismo fundamento, por lo tanto, la resolución recurrida incurre en causal de nulidad al volver a emitir pronunciamiento sobre un hecho que ya ha sido materia de pronunciamiento jurisdiccional. De otro lado, el recurrente comparando la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil dos, emitida por la Sala Penal Superior del Callao en el expediente número cuarenta - dos mil uno, con la impugnación del presente proceso, sostiene que no encuentra identidad de hecho entre los referidos

procesos, pues advierte que a nivel fáctico, la imputación marco de la sentencia que condenó a los beneficiados con la impugnada, no contiene los siguientes hechos que son materia del presente proceso: **a)** que con la empresa Peruvian Metals Sociedad Anónima Cerrada, respecto de la cual Christian Guzmán Miranda ostentaba el cargo de representante y gerente general y Julio Rodríguez Albarracín, han incurrido en el delito de defraudación tributaria al haber emitido facturas que contenían operaciones no reales a favor del Banco Wiese, proceso en el cual había intervenido la empresa Metalurgia Fénix Sociedad Anónima; **b)** Danilo Roberto Cuadros Palacios y Jhonny Charly Díaz García en su condición de representantes legales y gerentes de Exploración Gold Sociedad Anónima Cerrada, participaron en la transferencia de crédito fiscal inexistente a la empresa Frama Sociedad de Responsabilidad Limitada y a la empresa Metales y Agregados Sociedad Anónima; **c)** Dionisio Napuri Lavado, en su condición de representante legal y gerente de Gold Star Minera Industrial Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Frank Albert Export Import Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y como persona natural ha emitido facturas conteniendo operaciones irreales a las empresas Importaciones y Exportaciones Frama, Metales y Agregados Sociedad Anónima y al Banco Wiese. **Segundo:** Que, la denominada cosa juzgada como causa de extinción de la acción penal, es recogida en el cuarto párrafo del artículo cinco del Código de Procedimientos Penales, y procede cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme nacional o extranjera emitida en proceso penal seguido contra la misma persona. Constituyendo uno de sus efectos la prohibición de que por los mismos hechos y fundamentos se pueda juzgar a la misma persona. Esta eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de Cosa Juzgada son las que a su vez,

configuran en nuestra jurisprudencia el denominado derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in idem), previsto en el inciso trece del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el inciso siete del artículo catorce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. **Tercero:** Que, en función de lo propuesto por el recurrente, corresponde reevaluar si se satisface el supuesto de **Identidad del hecho u objeto del proceso**, en función del cual se prosigue la múltiple persecución por el mismo acontecimiento criminoso, exigiendo que la nueva promoción de la acción penal se refiera al mismo delito-hecho, es decir, que del cotejo entre la sentencia firme precedente y la posterior denuncia se llegue a la conclusión que entre ambos existe una identidad en cuanto a su realidad histórica como acontecimiento o fenómeno natural según su narración; en tanto, los presupuestos de identidad subjetiva o de persona y de fundamento se hayan claramente identificados, no vienen cuestionados a través del recurso de nulidad objeto de evaluación. **Quinto:** Que, para establecer la validez de la "identidad de hecho" en el trámite de impugnación ha de cotejarse el marco de imputación de la sentencia firme con la propuesta de el caso cuyo archivo se pretende a través de las diferencias factuales alegadas por el recurrente. Que efectuado el contraste requerido, se desprende con claridad de la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Superior del Callao, obrante a fojas mil doscientos setenta y cuatro, describe ampliamente los complejos y estructurados mecanismos defraudatorios ideados por los procesados a efectos de beneficiarse con crédito fiscal, para lo cual maquinaron un sistema de triangulación entre una serie de empresas a efectos de regularizar el oro obtenido del contrabando y defraudar al Estado con la obtención de crédito fiscal, de modo tal que a través de operaciones no reales de compra venta de dicha mercadería, trasladaban crédito,

fiscal ilegal; efectivamente como se consigna en la recurrida, del desarrollo de la sentencia emerge la descripción de la misma compleja conducta delictiva, donde incluso se mencionan al Banco Wiese, y las empresas Peruviam Metals y Explomin como las destinatarias de las ventas, textualmente se anota en la sentencia "utilizando mecanismos de triangulación a través de Peruviam y Explomin, quienes le vendían a una empresa designada, que supuestamente no tenía ninguna relación con él, como es el caso de Inversiones Trinidad, Frama y Metales y Agregados". La imputación allí efectuada describe, si bien con mayor generalidad, la misma resolución criminal que gobernaba la red de corrupción dirigida por Pedro David Pérez Miranda, con la intención de comercializar oro de contrabando y en la condición de proveedores vendérselo a empresas debidamente constituidas, con el otorgamiento de facturas y guías de remisión, logrando con esto obtener un beneficio ilícito con el aprovechamiento del IGV, de cuya estructura defraudatoria emerge la triangulación con las mismas empresas que se detallan en ambas imputaciones, incluidas las operaciones de compra venta a las empresas Importaciones y Exportaciones Frama, Metales y Agregados Sociedad Anónima y al Banco Wiese. Que, en consecuencia, no se advierten las diferencias anotadas por el recurrente, antes bien, los hechos cotejados refieren la intervención de las mismas personas acusadas, del mismo periodo fiscal, las mismas empresas objeto de la triangulación y la misma modalidad de defraudación fiscal utilizada, en cuyo marco las múltiples acciones de ventas fraudulentas de oro que se hayan generado con fines defraudatorios constituyen una unidad de la acción delictiva, que merece un tratamiento jurídico unitario para efectos procesales y sancionatorios, por un conjunto de hechos desplegados por los mismos sujetos activos representantes de las mismas empresas, que vulneraron

25/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 3449- 2009

LIMA

bienes jurídicos de un mismo sujeto pasivo, vinculados por una única resolución o designio criminal del autor, un mismo dolo que abarca el resultado total del hecho en sus rasgos esenciales en cuanto al lugar, al tiempo, a la persona, a la víctima y a la forma de comisión. De tal modo que los actos parciales o intermedios no representen más que la realización sucesiva de la totalidad querida unitariamente. Desde esta perspectiva, cualquier hecho adicional que no haya sido objeto de evaluación probatoria o fáctica que presente las mismas características defraudatorias de identidades de empresas concernidas, deberá considerarse integrado a la imputación fiscal resuelta. **Sexto:** Que, por lo expuesto, la identidad del hecho se mantiene aun cuando no se hayan descrito las operaciones comerciales que generaron el beneficio en defraudación del fisco con la misma exhaustividad que en el presente proceso, máxime si se advierte que dichas precisiones en las operaciones no fueron observadas en la primera persecución por razones ajenas a los procesados beneficiados, aún cuando constituía el mismo objeto de investigación fiscal, en consecuencia, la primera condena conserva toda su autoridad de cosa juzgada, y por ende, la impugnada ha de ser confirmada. **Sétimo:** Que, respecto a la situación jurídica de Jaime Manuel Sidouff Rodríguez y Pedro Celestino Reynaldo Córdova, se alega que éstos ya se les habría denegado un pedido similar, frente a lo cual se presenta un conflicto de entre dos derechos de índole constitucional: **a)** el de seguridad jurídica, que gobierna el precepto del numeral dos del artículo noventa del Código de Procedimientos Penales que prohíbe la admisión de nuevas incidencias que se sustenten en los mismos hechos que fueron materia de una resolución anterior, o que tuvieran el mismo objeto o finalidad que aquellos ya resuelto"; y, **b)** el de igualdad procesal, recogido en el artículo 2, numeral 2 de la Constitución Política del Perú. El máximo

intérprete constitucional delimita este derecho cuando refiere que "La igualdad es un principio - derecho que instala a las personas situadas en idéntica condición en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones". (STC Exp. 0261-2003-AA/TC, fundamento jurídico 3.1). El derecho a la igualdad supone, pues, tratar "igual a los que son iguales" y "distinto a los que son distintos". Con esas premisas se impone una obligación a todos los órganos públicos de no aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren en casos o situaciones similares. (STC Exp. 1279-2002 AA/TC). Ahora bien, tenemos que la vinculación con el principio de seguridad jurídica no es siempre absoluto, en tanto, frente a un distinto y posterior pedido vinculado, donde se aplica justificadamente un beneficio, no concedido a otros, al tratarse de un mismo proceso, la coherencia y predictibilidad perseguida por la seguridad jurídica se quiebra. Por otro lado, el principio de igualdad trae consigo el valor de justicia que se impone siempre a la formalidad, así la necesidad de firmeza generado en virtud del principio de seguridad jurídica debe ceder en determinadas circunstancias, en este caso frente a la persecución de un fin mayor de justicia verificado en el derecho a la igualdad. En consecuencia, corresponde confirmar la impugnada en todos sus extremos. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la resolución recurrida de fecha seis de abril de dos mil nueve, obrante a fojas mil novecientos sesenta y tres, en el extremo que declaró fundada la excepción de cosa juzgada deducida por Cristhian Francisco Guzmán Miranda, extensiva a los procesados Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez, Julio

Rodríguez Albarracín, Danilo Roberto Cuadros Palacios, Jhonny Charly Díaz Farfán, Pedro Celestino Reynaldo Córdova y Dionisio Napurí Lavado, en el proceso que se les sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la Fe Pública, en agravio del Estado, con lo demás que al respecto contiene es objeto de recurso; y los devolvieron.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS

BARAHONA DE DEMPWOLF

NEYRA

BA/ccm

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO
SECRETARIO(e)

Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA



Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

EXPEDIENTE N° 107- 2007 "E"
C.S. N° 3449- 2009
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DICTAMEN N° 1214 -2010-MP-EN-148SP

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA:

La Sala Penal Nacional, por Auto que obra a fs. 1963/1970 del presente cuaderno incidental, su fecha 08 de abril del 2009, **DECLARÓ: FUNDADA** la excepción de Cosa Juzgada deducida por el procesado **CRISTIAN FRANCISCO GUZMÁN MIRANDA** haciendo extensivo de oficio a favor de **JAIME MANUEL RIDOUTT RODRIGUEZ, JULIO RODRIGUEZ ALBARRACIN, DANILO ROBERTO CUADROS PALACIOS, JHONNY CHARLY DÍAZ FARFÁN, PEDRO CELESTINO REYNALDO CÓRDOVA y DIONICIO NAPURÍ LAVADO**, en el proceso que se les sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la fe pública en agravio del Estado; **INFUNDADA** la excepción de cosa juzgada deducida por el encausado **ALBERTO AMADEO ROSASCO FERRETI** en el proceso que se le sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la fe pública en agravio del Estado.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

El Procurador Público Ad – Hoc de la Sunat en su escrito de fs. 1978/1981 solicita que se declare la nulidad del auto impugnado y reformándolo se declare infundadas las excepciones de cosa juzgada a favor de los procesados Cristian Francisco Guzmán Miranda, Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez, Julio Rodríguez Albarracín, Danilo Roberto Cuadros Palacios, Jhonny Charly Díaz Farfán, Pedro Celestino Reynaldo Córdova y Dionicio Napurí Lavado, bajo los siguientes argumentos: a) Que, respecto a los procesados **Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez y Pedro Celestino Reynaldo Córdova** existen pronunciamientos previos con calidad de cosa juzgada que resuelven el mismo medio técnico de defensa basado en el mismo fundamento, por lo tanto, la resolución recurrida incurre en causal de nulidad al volver a emitir pronunciamiento sobre un hecho que ya ha sido materia de pronunciamiento jurisdiccional. b) Que, en relación a los procesados **Cristian Francisco Guzmán Miranda y Julio Rodríguez Albarracín**,

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (T)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

el marco de imputación de la sentencia emitida por la Primera Sala Penal del Callao de fecha 5 de marzo del 2002, tiene como sustento las denuncias interpuestas con fecha 19, 23 y 29 de abril de 1999, en las que solo se hace referencia a la participación de un grupo de empresas en la medida que han formado parte de una cadena de proveedores destinadas a otorgarle crédito fiscal indebido a la Empresa Inversiones Trinidad S.A. no así a los contribuyentes Banco Wiese, Importaciones y Exportaciones Framá S.R.L. y Metales Agregados S.A. que son materia de otras denuncias penales y que se acumularon en el expediente N° 107-2007, por lo que no se puede decir que se tratan de los mismos hechos. c) Que, referente a los procesados **Danilo Roberto Cuadros Palacios y Jhonny Charly Díaz Farfán**, se les imputa en el presente proceso haber participado en la transferencia de crédito fiscal inexistente a las empresas Framá S.R.L. y Metales y Agregados S.A., conductas que no forman parte de la imputación penal por delito de defraudación tributaria que fue materia de sentencia por la Primera Sala Penal del Callao, más aun, la empresa Metales y Agregados S.A. recién aparece denunciada como contribuyente involucrado en este delito a partir de la denuncia del caso "Engelhard", por lo cual estos hechos tampoco son los mismos materia de sentencia. d) Que, finalmente, respecto al procesado **Dionicio Napurí Lavado** en su condición de representante legal y Gerente de Gold Star Minera Industrial S.C.R.L., Frank Albert Export Import E.I.R.L. y como persona natural, ha entregado facturas a las empresas Framá S.R.L., Metales y Agregados S.A. y al Banco Wiese, referidos a operaciones irreales, hechos que no forman parte de la imputación penal por la que se emitió sentencia en la Primera Sala Penal del Callao.

H. HECHOS IMPUTADOS

Conforme es de verse de la acusación que obra a fs. 1537/1785, se inculpa a los procesados haber formado parte de la cadena de comercialización que se formó en el ejercicio fiscal de 1998, para simular sucesivas compras y ventas de oro que en la realidad no se produjeron, pero que permitió transferir a empresas exportadoras de oro, crédito fiscal por el supuesto pago de impuesto general a las ventas, generando a su vez, para sí mismas, crédito fiscal indebido.

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (II)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

En ese sentido se le imputa de manera específica a los acusados **Cristhian Francisco Guzmán Miranda** y **Julio Rodríguez Albarracín**, en su calidad de representante legal y gerente general de la empresa **Peruvian Metals Corporation S.A.C.** de propiedad de **Pedro David Pérez Miranda**, respectivamente; haber comercializado facturas por ventas de oro que la empresa no realizó, a cambio de un porcentaje; así como haber declarado ante la Administración Tributaria operaciones de compra de oro también ficticias, valiéndose de liquidaciones de compra de supuestos proveedores originales para "limpiar" el origen ilícito de esta mercancía, la misma que fue vendida al **Banco Wlesse**, a través de la empresa "Metalurgia Fénix S.A." del también procesado **Francisco Manuel Mejada Meza**.

Asimismo se incrimina a los procesados **Danilo Roberto Cuadros Palacios** y **Jhonny Charly Díaz Farfán**, representantes legales y gerentes generales de la empresa **Explomin Gold's S.A.C.**, haber proveído de facturas falsas, sin sustento real, a las empresas: **Importaciones y Exportaciones Frama**, **Inversiones Trinidad** y **Metales y Agregados S.A.**, todas proveedoras de las empresas exportadoras **Engelhard**, y **Negociaciones y Representaciones**, simulando a su vez operaciones de compra de oro a supuestos proveedores.

A **Pedro Celestino Reynaldo Córdova** se le imputa que en su condición de Presidente del directorio y gerente general de la Sociedad Minera **Nebraska** (calificada de empresa comisionista), haber proveído de facturas sin sustento a las empresas **Inversiones Trinidad** y **Metales y Agregados S.A.**, ambas de **Hernán Martorell de Feudis**.

Igualmente, se le incrimina a **Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez**, gerente general de **Acopiadora Importadora y Exportadora de Trinidad S.A.**, supuesta proveedora de las empresas **Inversiones Trinidad** (que según la acusación, comercializaba oro de contrabando) y el **Banco Wlesse**, haber utilizado "liquidaciones de compra" que le extendían vendedores informales, para acreditar adquisiciones ficticias de oro en el país.

TOMAS A. GÁLVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (T)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



14

Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

Finalmente, se inculpa al procesado **Dionisio Napurí Lavado**, que en su condición de representante legal y gerente general de las empresas Gold Star Minera Industrial S.C.R.L. y Frank Albert Export Import E.I.R.L. y como persona natural, haber proveído de facturas falsas por venta de oro a las empresas Importaciones y Exportaciones Frama, la misma que pertenecía al acusado **Antonio Marcos Romero**; asimismo a Inversiones Trinidad y **Metales Agregados del Perú**, ambas de **Hernán Martorell Feudis** y al Banco Wiese, simulando operaciones de compra de oro a supuestos proveedores.

III. ANALISIS

3.1. La garantía constitucional de la cosa juzgada exige para su configuración, aparte de la resolución firme, una triple identidad, de sujeto, hecho y fundamento¹, por tanto, frente a la excepción de cosa juzgada planteada por el procesado **Cristian Francisco Guzmán Miranda** y hecho extensivo por el Colegiado Superior a los procesados **Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez**, **Julio Rodríguez Albarracín**, **Danilo Roberto Cuadros Palacios**, **Jhonny Charly Díaz Farfán**, **Pedro Celestino Reynaldo Córdova** y **Dionicio Napurí Lavado**, se deberá verificar la concurrencia de estos requisitos a fin de establecer la validez o no de la decisión impugnada.

3.2. Respecto a la identidad de hecho, se advierte en la sentencia de fs. 1874/1902 y Ejecutoria Suprema de fs. 1903/1907 que se condenó a los procesados **Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez** (Gerente General de Acopiadora Importadora Exportadora de Oro y Metales Preciosos), **Julio Rodríguez Albarracín** (Gerente de Peruvian Metals Corporation), **Pedro Celestino Reynaldo Córdova** (Presidente del Directorio de Sociedad Minera Nebraska y Director de Atlantic Gold) y **Danilo Roberto Cuadros Palacios** (Gerente General de Explomin Gold S.A.C.), por haber realizado maniobras fraudulentas destinadas a la obtención indebida de saldo a favor por exportación ascendente a S/ 2'134,579 Nuevos Soles en beneficio de la empresa Peruvian Metals Corporation, simulando la realización de compras a supuestos proveedores y la realización de

¹ Ver sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 2725-2008-PHC/TC del 22 de septiembre del 2008.

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (T)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

exportaciones de oro, con la única finalidad de obtener beneficios tributarios en los años de 1998 y 1999.

De igual forma, del estudio de la comercialización de Peruvian Metals Corporation S.A.C. se estableció que las operaciones con sus proveedores Explomin Gold S.A.C. y Sociedad Minera Nebraska, así como con los proveedores de estos, Acopiadora Importadora y Exportadora de Oro y Metales Preciosos S.A., Empresa de Desarrollo Minero S.R.L. Edemi y José García Enoki – Negociaciones del Sur (cuyos representantes han facilitado las facturas de sus empresas para legalizar las operaciones comerciales de Peruvian Metals Corporation S.A.C.) no son reales (no se realizaron).

También se ha determinado que a través de Peruvian Metals Corporation S.A.C., Minera Nebraska, Explomin Gold S.A.C. y Acopiadora Importadora y Exportadora de Oro y Metales Preciosos S.A., se transmitieron fraudulentamente crédito fiscal a la empresa Inversiones Trinidad S.A. durante el periodo de septiembre a diciembre de 1998; asimismo, se estableció que entre los proveedores que trasladaron el crédito fiscal inexistente a Trinidad se encuentra en el Ejercicio Fiscal del año 1998, **Dionicio Napuri Lavado** como persona natural y representante legal y gerente general de las empresas Gold Star Minera Industrial S.C.R.L. y Frank Albert Export Import E.I.R.L.

Asimismo, se ha acreditado que **Pedro Pérez** creó la empresa Peruvian Metal Corporation S.A.C. junto con **Rodrigo Albarracín**, **Cristhian Francisco Guzmán Miranda** y **Cedron Tacunan** y Explomin Gold S.A.C. junto con **Jhonny Charly Díaz Farfán**, **Germán Vitorero Silva** y **Danilo Cuadro Palacios** para el internamiento y comercialización ilegal de oro en el mercado local con el fin de beneficiarse con la no entrega del impuesto general a las ventas, iniciando operaciones con la empresa Metalor Usa Refinir Corp.

3. De los cargos por los cuales fueron sentenciados los procesados **Cristian Francisco Guzmán Miranda**, **Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez**, **Julio Rodríguez Albarracín**, **Danilo Roberto Cuadros Palacios**, **Jhonny Charly Díaz Farfán**, **Pedro**

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (1)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

Celestino Reynaldo Córdova y Dionicio Napurí Lavado, en el expediente signado con el N.º 40-2001 y glosados en los numerales precedentes, se advierte claramente que en ella no se hace referencia alguna a la comercialización de facturas al Banco Wiese ni a la empresas Importaciones y Exportaciones Fram S.A. y, Metales y Agregados S.A., hechos que sí forman parte del objeto del presente proceso, tal como se ha glosado en el numeral II del presente dictamen, por lo que no existe la identidad de hecho, requisito indispensable para que se configure la cosa juzgada a favor de los procesados, por tanto, la excepción propuesta debió desestimarse al no presentarse en autos los fundamentos concurrentes de la cosa juzgada.

IV. CONCLUSIÓN:


Por los fundamentos expuestos, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal en uso de las facultades conferidas por ley, es de **OPINIÓN** que se declare **HABER NULIDAD** de la Resolución recurrida en el extremo que **DECLARÓ FUNDADA** la excepción de Cosa Juzgada deducida por el procesado Cristian Francisco Guzmán Miranda, haciendo extensivo de oficio a favor de Jaime Manuel Ridoutt Rodríguez, Julio Rodríguez Albarracín, Danilo Roberto Cuadros Palacios, Jhonny Charly Díaz Farfán, Pedro Celestino Reynaldo Córdova y Dionicio Napurí Lavado en el proceso que se les sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la fe pública en agravio del Estado y **REFORMANDOLA** se declare **INFUNDADA** la excepción de Cosa Juzgada interpuesta².

OTROSI DIGO: El suscrito se avoca al conocimiento del presente proceso, en virtud a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1052-2010-MP-FN, expedida en la fecha.

Lima, 18 de mayo de 2010.



TAGV/JABC/jdc.


TOMÁS A. GALVEZ VILLEGAS
Fiscal Adjunto Supremo (T)
Encargado del Despacho de la
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

² Es importante señalar que el extremo de la Resolución impugnada que declara **INFUNDADA** la excepción de cosa juzgada deducida por el encausado Alberto Amadeo Rosasco Ferreti en el proceso que se le sigue por el delito de defraudación tributaria y contra la fe pública en agravio del Estado, ha quedado consentida y por lo tanto tiene la calidad de Cosa Juzgada.